



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	ROSA ELVIRA SEPULVEDA DIAZ
DEMANDADAS	COLPENSIONES Y PROTECCION S.A.
ORIGEN	Juzgado Veinte Laboral del Circuito
RADICADO	050013105020-2018-00229-01
TEMAS	Ineficacia de traslado de régimen pensional
CONOCIMIENTO	Consulta y apelación
ASUNTO	Sentencia de segunda instancia

En la fecha y hora señaladas, la Sala Sexta de decisión Laboral, integrada por los Magistrados ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ, DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN y la Ponente MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1° del art. 15 del Decreto 806 de 2020 profiere sentencia escrita, dentro del proceso ordinario laboral promovido por ROSA ELVIRA SEPULVEDA DIAZ contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.<sup>1</sup>

I. ANTECEDENTES

Hechos y pretensiones de la demanda<sup>2</sup>

La señora Rosa Elvira Sepúlveda Díaz, formula demanda contra Protección S.A., pretendiendo se declare: **i)** La ineficacia y/o nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad RAIS a través de Protección S.A. por existir vicio en el consentimiento, disponiendo su regreso automático y sin solución de continuidad al Régimen de Prima Media -RPM-; además que **ii)** nunca tuvo la re-asesoría justo antes que cumpliera 47 años de edad, y por ello le asiste derecho a **iii)** que su pensión sea reconocida por Colpensiones aplicando la Ley 797 de 2003, y como consecuencia de lo anterior se condene a **iv)** Protección S.A. trasladar hacia Colpensiones los valores de la cuenta de ahorro individual de la actora, incluidos los rendimientos y sin ningún descuento por cuotas de administración; y se ordene a Colpensiones **v)** a reactivar la afiliación en el RPM y recibir los aportes trasladados desde el RAIS; **vi)** a reconocer y

<sup>1</sup>Nota: La foliatura a la que se hace referencia en esta sentencia corresponde a la asignada digitalmente por este Despacho al archivo “1. Expediente Radicado Nro. 2018-00229”, visible en la parte superior derecha de cada página, en color rojo.  
<sup>2</sup> Fls. 3/7

pagar a la actora pensión de vejez a partir del 25 de febrero de 2017, junto con los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación **vii)** lo extra y ultra petita y **viii)** Costas del proceso.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 25 de febrero de 1960 e inició cotizaciones ante el extinto Instituto de Seguros Sociales -ISS- el 1° de noviembre de 1995, prestando servicios públicos y privados, y desempeñando actualmente el cargo de auxiliar administrativa en calidad de empleada pública. Suscribió traslado con destino a Protección S.A. el 16 de febrero de 1999 como consecuencia de la asesoría recibida en su lugar de trabajo por promotores de dicho fondo sin informarle las consecuencias que conllevaría dicho traslado, las diferencias entre ambos regímenes ni las modalidades de pensión existentes, tampoco fue reasesorada en momento anterior a cumplir 47 años de edad.

El 26 de junio de 2012 radicó ante el ISS formulario de vinculación, el cual nunca respondió la entidad. El 23 de agosto de 2017, Protección S.A negó el traslado de régimen solicitado por la demandante. El 7 de septiembre de 2017 radicó ante Colpensiones solicitud de aceptación del traslado al RPM y el reconocimiento de la pensión; pero la entidad solo se pronunció frente al reconocimiento de la pensión, negándola.

#### **Trámite desplegado en la primera instancia:**

Mediante auto del 15 de enero de 2019<sup>3</sup>, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, declaró la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, fundamentando que no era competente para asumir conocimiento del proceso por ostentar la demandante calidad de empleada pública y pretender pensión de vejez, disponiendo la remisión del expediente ante los juzgados administrativos de Medellín para lo de su competencia.

Asignado el proceso al Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Medellín, éste declaró su falta de jurisdicción y suscitó conflicto negativo de competencia<sup>4</sup>, el cual fue dirimido por la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura mediante providencia del 4 de julio de 2019, asignando el conocimiento al juzgado laboral<sup>5</sup>, argumentando para ello que el litigio central de la demanda- declaratoria de ineficacia del traslado que realizó la demandante desde el RPM al RAIS, es un litigio inherente al Sistema de Seguridad Social Integral, entre una afiliada, aunque empleada pública, su administradora del régimen pensional es una entidad privada, por lo que no encontró acreditados los presupuestos del numeral 4° del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 para que el proceso fuera conocido por la jurisdicción contenciosa administrativa.

El Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, dio cumplimiento a lo ordenado mediante providencia del 7 de noviembre de 2019<sup>6</sup>, dejando sin efecto la declaratoria de nulidad y ordenando continuar con el trámite.

---

<sup>3</sup> Fls. 177/178

<sup>4</sup> Fls. 181/185

<sup>5</sup> Fls. 193/206

<sup>6</sup> Fl. 211

### **Oposición a las pretensiones de la demanda**

Las demandadas se opusieron oportunamente a las pretensiones de la demanda, así:

#### **i) Protección S.A.<sup>7</sup>**

Los actos jurídicos de traslado suscritos por la actora hacia Protección S.A. y posteriormente a ING Santander (absorbida posteriormente por Protección S.A.) cumplieron todos los requisitos de existencia y validez, derivando todos los efectos jurídicos. Además, convalidó la actora su consentimiento de permanecer al RAIS al suscribir el formulario de traslado entre administradoras del RAIS. No es admisible que las expectativas económicas de la pensión sean el fundamento de lo pretendido, pues la forma de liquidar la prestación en el régimen está legalmente consagrada, y ello implicaría que si se cumplieran sus expectativas el acto sería válido y eficaz. No demostró la violación a derechos o garantías por daños que se le estén ocasionando, motivo por el cual no se puede endilgar responsabilidad alguna a la AFP del fondo privado. No era obligación del fondo reasesorar a la actora, pues dicho deber solo surgió en el 2016, momento en que la actora ya había cumplido los 47 años de edad. Excepcionó inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, indebida acumulación de pretensiones y la que llamó “innominada”.

#### **ii) Colpensiones<sup>8</sup>**

La afiliación de la demandante al RAIS fue libre y voluntaria, Colpensiones actuó bajo la norma procedente y es a Protección S.A. a quien compete probar que brindó información a la actora al momento del traslado, par que dicho acto se reputé libre de vicios. Excepcionó: inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción y la que denominó “genérica”.

### **Sentencia de primera instancia<sup>9</sup>**

El 25 de junio de 2020, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín declaró la ineficacia del traslado que realizó la demandante hacia la AFP Santander hoy Protección S.A. el 16 de febrero de 1999, entendiendo que siempre ha estado afiliada al RPM, hoy administrado por Colpensiones. Condenó a Protección S.A. a trasladar el saldo de la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluidos rendimientos, a la fecha en que se cumpla la sentencia, así como los descuentos efectuados de la pensión de garantía mínima, gastos de administración y sumas adicionales de la aseguradora (debidamente indexado) – con cargo a sus propios recursos-, solo si la sumatoria del capital y rendimientos resultare inferior al aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado en caso de que la demandante hubiera permanecido en el RPM; le ordenó además asumir las obligaciones por el periodo de afiliación de la actora en la AFP Santander. Condenó en costas a Protección S.A. en favor de la demandante.

---

<sup>7</sup> Fls. 88/104

<sup>8</sup> Fls.164/170

<sup>9</sup> Archivos de audio 16 y 17, y 18. Acta Audiencias Arts. 77 y 80 C.

Declaró la falta de jurisdicción para conocer de la pensión de vejez, al considerar que, aun cuando se haya dirimido el conflicto de competencia, dicha decisión se fundamentó en la vinculación que ostentaba la empleada pública con el fondo privado al momento de presentar la demanda, circunstancia que cambió con la declaratoria de ineficacia de traslado y por tanto la disposición de su afiliación a Colpensiones sin solución de continuidad.

Relaciona el precedente judicial vigente en la materia, según el cual, la AFP el RAIS demandada tenía la carga de demostrar el cumplimiento de su deber de información al traslado de la afiliada, misma que no satisfizo, generando el reconocimiento de la ineficacia del acto jurídico, con las consecuencias que se han señalado.

## **Recursos de apelación**

### **i) Colpensiones**

Inconforme con la decisión proferida en primera instancia, sostiene que el acto de traslado es válido y solicita analizar el debate probatorio desplegado en el proceso, con el cual no se puede colegir lo que motivó a la demandante a suscribir el traslado, quién además fue negligente en un tema de vital importancia como es su futuro pensional, actuar que debe ser relevante para el caso, quién además también tenía el deber de informarse acerca del sistema, de emplear una adecuada atención y cuidado en la toma de decisiones, y como no se logró probar una coacción o que se haya viciado su consentimiento que conlleve a la conclusión de la invalidez de su afiliación, pues resulta evidente que este fue voluntario y cumplió todos los requisitos para su existencia.

Sostiene que conforme a la sentencia C-1024 del 2004 que remite al artículo 95 de la Carta Política, resulta contrario a los principios de eficiencia pensional y sostenibilidad financiera, que una persona próxima a pensionarse se beneficie de las cotizaciones realizadas por toda la vida laboral de los afiliados, precedente que debe ser vinculante para el caso en estudio.

Pide además se ordene la devolución de la totalidad de los aportes al RPM como cuenta de ahorro individual, rendimientos, bonos pensionales, seguros provisionales y cuotas de administración, para garantizar el principio de sostenibilidad financiera y que el financiamiento de dicha pensión.

### **Alegatos de conclusión en segunda instancia**

Las partes oportunamente recorrieron oportunamente el traslado para alegar en esta instancia mediante escritos dirigidos a la dirección *myepesg@cendoj.ramajudicial.gov.co*, así:

### **i) Colpensiones:**

Se ratificó en los argumentos expuestos en su contestación y en alegatos de primera instancia, para pedir se absuelva a la entidad de todas las condenas impuestas y

pretende equivocadamente se revoque condena en costas, no impuesta en la primera instancia.

Argumentó en su escrito que, no se allegó elemento probatorio alguno por parte de la actora para probar sus dichos, y pese a que en casos como este se invierte la carga de la prueba, es necesario que se demuestre la intervención del fondo privado generadora del vicio en el consentimiento, pues no puede basarse en conjeturas y suposiciones, y la evidencia probatoria del proceso permite colegir que la afiliación fue voluntaria y válida, y en su momento el ISS, permitió la libre escogencia y tránsito de los afiliados, sin haber incumplido ningún mandato legal o constitucional. Itera también la aplicación de la sentencia C-1024 del 2004 al caso concreto.

## **ii) Protección S.A.:**

Remitiéndose erradamente a lo expuesto en recurso de apelación, el cual no interpuso, solicita se absuelva la entidad de devolver a Colpensiones, el valor de los gastos de administración y seguro previsional; por lo siguiente:

i) La comisión de administración es un descuento autorizado por la ley en ambos regímenes, se realiza con el fin de cubrir gastos de administración y pagar la prima de seguro previsional y sobre el cual opera el fenómeno de prescripción, por ser un concepto de tracto sucesivo causado periódicamente y que no financia directamente la pensión.

ii) La buena administración de los aportes se evidencia con los rendimientos generados de la cuenta de ahorro de la demandante.

iii) Con la condena de la devolución de estos conceptos, se estaría constituyendo un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones, por recibir una comisión que no está destinada a financiar la pensión de vejez, además porque ya se están trasladando los rendimientos de la cuenta de ahorro individual, fruto de la buena gestión de Protección S.A., por lo cual la AFP tiene derecho a conservar esta comisión como restitución mutua a favor.

iii) En virtud del artículo 1746 del C.C, la consecuencia de la nulidad implica que las cosas vuelvan a su estado inicial, pero no puede desconocerse las mejoras y frutos producidos por la administración de la AFP, lo cual permite hablar de las prestaciones acaecidas, que, si en aplicación estricta de la teoría de la nulidad del derecho se concluiría que si la comisión nunca se debió haber descontado, tampoco debieron existir rendimientos.

iv) Las consecuencias de la declaratoria de ineficacia no pueden afectar a terceros de buena fe, siendo así que la devolución de los aportes no supone una retroactividad plena, debiendo mantenerse todas las situaciones consolidadas y que se presumieron de buena fe.

v) El Concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia financiera de Colombia, indicó que cuando se declara la ineficacia debe darse aplicación al artículo

7 del Decreto 3995 de 2008, respetando la gestión de administración que genera los rendimientos por parte de las aseguradoras y la prima del seguro previsional, porque este ya fue sufragado y la compañía aseguradora cumplió con su deber contractual, quien se constituye en un tercero de buena fe.

## **ii) Demandante:**

Solicita sea confirmada la sentencia de primera instancia en aplicación del criterio jurisprudencial que expone el órgano de cierre en la materia, las normas vigentes y el material probatorio que reposa en el expediente, con el cual se logró demostrar que la actora no obtuvo una asesoría clara, completa y eficiente al momento de su traslado.

## **II. SON CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL**

La competencia de la Sala está dada por los artículos 66, 66A del CPTSS, respecto de los puntos objeto de apelación. Igualmente se surte el grado jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, conforme al artículo 69 del CPTSS modificado por la Ley 1149 de 2007, y en acatamiento de la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, en sentencia de radicado 7382 de 2015.

Examinados los hechos y pretensiones de la demanda, así como la oposición formulada por las demandadas, y los argumentos de la decisión de primera instancia, interpreta la Sala, que el **problema jurídico** a resolver se circunscribe a determinar: **a)** la viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS, de ser procedente dicha declaratoria, se precisarán, **b)** las consecuencias de dicha declaración y qué conceptos deberá trasladar la AFP del RAIS demandada a Colpensiones, dado que el fundamento fáctico de las pretensiones de la demanda es el incumplimiento del deber legal de información por parte del fondo, lo que al tenor del art. 271 de la Ley 100 de 1993, ocasionaría no la nulidad, si no la ineficacia del acto jurídico, tal y como lo concluyó la A Quo.

Adicionalmente, se estudiará **c)** si asiste a la demandante el derecho a que Colpensiones le reconozca y pague pensión de vejez, así como las condiciones de la prestación.

Lo anterior, pese a que la juez de instancia declaró falta de jurisdicción para resolver la pretensión de reconocimiento y pago de pensión de vejez y que ello no fue objeto de recurso por la parte actora, la Sala encuentra pertinente analizarla atendiendo: **i)** que el conflicto de competencia dirimido por la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura asignó la competencia para resolver las pretensiones de demanda a la jurisdicción laboral, resultando irrelevante que la pretensión principal involucrara a la entidad privada Protección S.A., lo que implicaba su competencia para resolver sobre las pretensiones subsidiarias a la declarativa principal, y no se supeditó tal decisión a la declaratoria de ineficacia y el retorno efectivo de la empleada pública a Colpensiones; **ii)** al carácter de derecho mínimo fundamental de la pensión de vejez de la señora Rosa Elvira Sepúlveda y **iii)** con el fin de materializar el principio de

celeridad procesal y garantizar el derecho de acceso a la justicia de la demandante, dando solución definitiva a sus pretensiones, sin remitirla a trámites adicionales.

Finalmente se analizará **d)** si procede la condena al pago de intereses de mora o de la indexación de las mesadas pensionales.

## **Hechos relevantes probados documentalmente**

- Rosa Elvira Sepúlveda Díaz nació el 25 de febrero de 1960 (fls.26 y 27)
- Presentó vinculación desde el 02 de enero de 1984 hasta el 30 de junio de 1995 con la ESE Hospital Mental de Antioquia como auxiliar administrativa, sin cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones<sup>10</sup>, por lo que al 30 de junio de 1995, cuando entró en vigencia el SGSSP para ella, por ser empleada pública del sector departamental, contaba con 35 años de edad y no tenía 15 o más años de servicios y/o cotizaciones, siendo por ello, en principio beneficiara del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 por edad.
- Suscribió solicitud de traslado de régimen pensional que acusa de ineficaz, el 19 de febrero de 1999 con destino a la AFP Protección S.A.<sup>11</sup>. Posteriormente, el 29 de agosto de 2008 se trasladó hacia ING Pensiones y Cesantías Santander<sup>12</sup>, fondo posteriormente absorbido por Protección S.A.
- El 26 de junio de 2012, cuando la actora contaba con 52 años, suscribió formulario de afiliación al entonces ISS<sup>13</sup>, del cual no obra respuesta en el presente trámite. El 07 de septiembre de 2017, radicó ante Colpensiones solicitud de traslado, activación de la afiliación y reconocimiento de la pensión de vejez, como consecuencia de que no recibió información al momento de trasladarse al RAIS<sup>14</sup>, en la misma fecha la entidad negó el reconocimiento de la pensión de vejez por no estar afiliada al RPM<sup>15</sup>.
- Al 24 de julio de 2017, la demandante contaba con 1699.58 semanas de cotización en toda su vida laboral<sup>16</sup>.

### **a) Viabilidad de declarar o no la ineficacia de la afiliación de la demandante al RAIS**

Con la finalidad de determinar la eficacia o ineficacia de la afiliación al RAIS por parte de la demandante, es menester acudir a los siguientes preceptos normativos que regulan la materia:

---

<sup>10</sup> Fls. 32 y 68

<sup>11</sup> Fls. 28 y 109

<sup>12</sup> Fl. 110

<sup>13</sup> FI 55

<sup>14</sup> FI 60, 62/64.

<sup>15</sup> FL. 61

<sup>16</sup> Suma del bono pensional y las semanas cotizadas ante Protección S.A. FI. 37

i) Los artículos 48<sup>17</sup>, 53, 335<sup>18</sup> y demás normas concordantes de la Constitución Política; ii) La Ley 100 de 1993 en sus artículos 1<sup>19</sup>, 3, 4, 10, 12, 13 literal b, Inciso 3º del Literal c) del artículo 60, 90, 97, 271; iii) Artículo 4 y demás normas concordantes del Decreto 656 de 1994<sup>20</sup>; iv) Decreto 692 de 1994; v) El Decreto 663 de 1993, cuyo artículo 72 en su literal f) adicionado por el art. 12 de la Ley 795 de 2003, contiene prohibiciones expresas<sup>21</sup> para las entidades del sector financiero entre ellas las AFP; y vi) Los arts. 4, 10, 12 y demás concordantes del Decreto 720 de 1994<sup>22</sup>

La referida temática del asunto objeto de litigio bajo estudio ha sido decantada suficientemente por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, quien ha construido y enriquecido el precedente judicial que viene acogiendo esta Sala de Decisión Laboral, por compartir la postura desarrollada por la Alta Corporación en torno a la eficacia de la filiación inicial y/o el traslado de régimen pensional con destino al RAIS.

Dicho precedente, conformado múltiples sentencias como las de radicado: 31989 de 2008, 31314 de 2008, 33083 de 2011, 46292 de 2014, 17595 de 2017, 19447 de 2017, 4296 de 2018, 1421 de 2019, 1452 de 2019, 1688 de 2019, 373 de 2020 y 2887 de 2020, se fundamenta en la necesidad de determinar si en cada caso concreto, la AFP receptora de la afiliación, satisfizo tanto para ese momento, como durante la vigencia de la relación con quien demanda la ineficacia, el deber de información que le asiste,

---

<sup>17</sup> Con fundamento en el **artículo 48 de la Constitución Política**, se expidió **la Ley 100 de 1993**, en la cual se creó el sistema de seguridad social integral como servicio público esencial, obligatorio, con dos regímenes pensionales coexistentes e incompatibles, siendo uno de ellos el régimen de ahorro individual con solidaridad, con características propias y requisitos muy particulares, sobre la causación y monto de la pensión de vejez.

<sup>18</sup> Las actividades que desarrollan las AFP al tenor del **artículo 335 de la CN.**, son de interés público y su ejercicio está reglamentado por la ley, en razón de la función que desempeñan.

<sup>19</sup> Consagró el artículo primero de esa ley 100, como objeto del aludido sistema: *garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la comunidad “para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afectan.”*

<sup>20</sup> Conforme al **artículo 4** y demás normas concordantes del **Decreto 656 de 1994**, las administradoras se sitúan en el ámbito de la **responsabilidad profesional**, que **las obliga a prestar de manera eficiente, eficaz y oportuna los servicios** inherentes a la calidad de instituciones de carácter previsional, considerados idóneos por sus conocimientos técnicos especializados y experiencia en compleja materia financiera, para garantizar derechos de sus asegurados; tal responsabilidad se mide con mayor rigor que el utilizado frente a las obligaciones entre particulares, en razón a la delegación del servicio público de seguridad social en pensiones que asumen en el RAIS, sostiene la SCL de la H. Corte Suprema

<sup>21</sup> Se les prohíbe: **“No suministrar la información razonable o adecuada que a juicio de la Superintendencia Bancaria deba entregarse al público, a los usuarios o a los clientes de las entidades vigiladas para que éstos puedan tomar decisiones debidamente informadas y puedan conocer cabalmente el alcance de sus derechos y obligaciones en las relaciones contractuales que los vinculan o puedan llegar a vincular con aquellas”.**

<sup>22</sup> Norma Reglamentaria de los arts. 105 y parcialmente del 287 de la ley 100 de 1993 en cuanto al régimen de promoción y de responsabilidad de las sociedades AFP. disponiendo en el inciso final del artículo 4: QUE LAS ACTUACIONES DE LOS VENDEDORES EN EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD OBLIGAN A LAS AFP , respecto de la cual se hubiere promovido la respectiva vinculación, es decir, comprometen la responsabilidad de éstas como establece su art. 10 y precisa en el art. 12 que tales promotores deben suministrar suficiente, amplia y oportuna información a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante la vinculación, y con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.



de acuerdo a lo previsto en el Decreto 663 de 1993, aplicable a las AFP desde su creación, en el que se prescribió en el numeral 1.º del artículo 97, la obligación de las entidades de “*suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen*”.

Igualmente se fundamenta entre otras disposiciones, en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el literal b) del artículo 13 de misma norma, para colegir que los trabajadores tienen la opción de elegir *libre y voluntariamente* el régimen pensional que mejor le convenga y consulte sus intereses, razón por la cual, si alguna persona jurídica o natural atenta en cualquier forma contra el derecho de afiliación y selección de organismos e instituciones del sistema de seguridad social, se genera como consecuencia la ineficacia de la afiliación.

Múltiples Salas de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín han considerado que, si bien los casos concretos abordados por la H. Corte Suprema de Justicia, refieren a personas que fueron beneficiarias del régimen de transición pensional consagrado en el art. 36 de la Ley 100/93, la *ratio decidendi* de sus decisiones aplica para todo afiliado que se afilia al Sistema Pensional por primera vez o se traslada entre regímenes en el marco del mismo, pues la eficacia de la afiliación, se hace recaer en que se demuestre en cada proceso que la AFP sí suministró, a quien una vez fuera su potencial afiliado, *información clara, completa, suficiente*, en términos de transparencia y eficiencia, de manera que pueda concluirse que la decisión adoptada entonces, obedeció a un conocimiento claro y preciso, no sólo de lo que se hacía, si no de las consecuencias que se derivarían de la suscripción del formulario de afiliación correspondiente y que por lo tanto ese acto jurídico surgió de una manifestación de voluntad, libre, espontánea y sin presiones.

Lo anterior, tal y como reitera la H. CSJ en sentencias SL 1688-2019-68838 y 373 de 2020, indicando que es deber del fondo brindar una información oportuna y adecuada, ello, indiferentemente de si se tiene o no derechos consolidados, o beneficio transicional, si se está próximo a adquirir requisitos para pensionarse, “dado que la omisión al deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo”, (subrayas fuera de texto.)

En tal sentido, la responsabilidad de las Entidades Administradoras de Pensiones en esta etapa preparatoria a la decisión de afiliación o traslado es de CARÁCTER PROFESIONAL: **i)** Por la alta complejidad de la información que se debe analizar antes de la afiliación o traslado; **ii)** Por los derechos constitucionales que se encuentran comprometidos: La seguridad social y el derecho pensional, de carácter irrenunciable; **iii)** Porque se trata de una actividad que concierne a intereses públicos; **iv)** Porque debe primar en su comportamiento y decisiones, una ética de responsabilidad social, transversal a todo su quehacer, de manera que prime el interés colectivo que se realiza en cada persona que se afilia, sobre el interés particular que tenga la entidad, de alcanzar sus metas de crecimiento y beneficios económicos.

La carga de la prueba asiste a la AFP a quien se acuse de incumplir con el deber de información; esto es así, porque el análisis parte de la afirmación indefinida sobre la ausencia del cumplimiento de ese deber.

En el sublite, **se practicó interrogatorio de parte a la señora Rosa Elvira Sepúlveda Díaz**, sin embargo, no se presentó la confesión de la demandante, pues de su declaración, se advierte que el traslado de régimen pensional obedeció a que uno de los asesores de Protección S.A., quien se hizo presente en el lugar donde ella trabajaba por autorización del empleador, les indicó que el ISS se quebraría, en tanto Protección S.A. sería más rentable, siendo más favorable para ella permanecer a esa AFP, más no les informaron cuáles serían las consecuencias del traslado, ni las características de ambos regímenes; y aunque la actora aceptó que la empresa para la que laboraba les informó que debían trasladarse a un fondo privado por la inminente liquidación del ISS, advirtió que no se sintió coaccionada para suscribir su traslado y desconoce si los que faltaron a la asesoría tuvieron consecuencias laborales adversas; obedeció entonces el traslado de la actora, básicamente al temor relacionado con que la administradora en que estaba afiliada dejaría de funcionar.

La AFP del RAIS demandada, no aportó prueba documental que plasme en su contenido la asesoría brindada a la señora Rosa Elvira en momento anterior a la suscripción de formularios de afiliación, ni en el curso de esta. Siendo Protección S.A. la llamada a demostrar que había suministrado la información suficiente, clara, completa a la entonces potencial afiliada.

Lo anterior, conduce a concluir que la pasiva no demostró a satisfacción su ineludible deber legal de brindar a la hoy demandante una oportuna información adecuada, suficiente, cierta y comprensible, en términos de transparencia y eficiencia respecto a la vinculación en los dos regímenes pensionales; ni sobre los beneficios e inconvenientes que les generaría el suscribirse a un régimen o a otro, y en general, las consecuencias del tal afiliación, entre ellas, las modalidades de la pensión, el capital necesario para acceder a la pensión de vejez de manera ordinaria, o anticipada, los componentes y variables para establecer el monto de la prestación económica en el RAIS y su comparativo en el RPM, los requisitos para heredar el capital de la cuenta de ahorro individual en caso de fallecimiento, el derecho de retracto, las implicaciones de la negociación anticipada del bono pensional, la posibilidad e incluso la necesidad de hacer cotizaciones adicionales, para obtener la prestación de vejez en el RAIS, entre otros aspectos relevantes, para generar en los posibles afiliados, verdadero consentimiento plenamente informado y por tanto, libre y voluntario en la selección o traslado de régimen de pensiones, y ese deber de información es exigible en cada etapa de la afiliación y ejecución del acto jurídico, como bien ha dilucidado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia.

La consecuencia del incumplimiento de las mencionadas obligaciones por parte de Protección S.A., es la INEFICACIA DE LA AFILIACIÓN AL RAIS, que da lugar a garantizar el derecho de la accionante a retornar al Régimen de Prima Media con Prestación Definida hoy administrado por COLPENSIONES y declarar que ha permanecido, sin solución de continuidad, lo que conlleva a la reactivación de su respectiva afiliación en este último régimen.

Tales motivaciones permiten **confirmar** en estos aspectos la sentencia conocida en apelación y consulta.

## b) Consecuencias de la declaratoria de ineficacia

Ahora para precisar cuáles son los conceptos que deben trasladarse, como consecuencia de la ineficacia de su afiliación, reexaminado el precedente judicial de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, observa esta Sala que a partir la sentencia con radicado 31989 de 2008 en la cual se fundamenta la *ratio decidendi* de estos procesos, esa Alta Corporación determinó que por efecto de la entonces denominada nulidad, hoy ineficacia, generada con ocasión del actuar negligente de las AFP del RAIS, en materia de información, éstas se encuentran obligadas a remitir a Colpensiones no sólo las cotizaciones, rendimientos, bonos pensionales, cuotas o gastos de administración, lo destinado a garantía de pensión mínima sino también las sumas adicionales de la aseguradora.

Dicha sentencia es de obligatoria cita en el proceso en que se ha discutido el tema de la ineficacia de la afiliación y el traslado de régimen pensional, siendo parcialmente trascrita en las sentencias que hemos mencionado con antelación, por lo que concluimos que hay lugar a adoptar lo decidido por nuestro órgano de cierre sobre la materia, despachando desfavorablemente lo alegado de conclusión en esta sede por Protección S.A.

Tampoco se acogerán los argumentos de Protección S.A. esbozados en esta instancia, referente a que debe revocarse la orden de traslado de las cuotas de administración, puesto que la consecuencia de la declaratoria de la ineficacia, en asuntos como el abordado en este proceso, implica que la parte beneficiada económicamente con el acto ineficaz por omisión del deber de información, garantice que el patrimonio de la parte inducida a la afiliación no sufra modificaciones, y pueda disfrutar de las prestaciones del RPM, como si hubiera permanecido en él. No requiriéndose para ello que el demandante acredite perjuicios como interpreta la AFP Protección S.A. Además, es menester que la orden judicial garantice, la no afectación financiera del régimen de prima media que reciba al afiliado, para que pueda satisfacer las prestaciones que se generen en su favor.

Por lo anterior, no se acogerá el argumento de los alegatos de conclusión en esta sede por parte de Protección S.A, respecto a que no deben trasladarse los gastos administración y prima de seguro previsional, amparándose en el **Concepto del 17 de enero de 2020 emitido por la Superintendencia Financiera de Colombia**, a la luz del artículo 28 del CPACA<sup>23</sup>, ante consulta realizada por la Vicepresidente Jurídica de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías -ASOFONDOS-, interpretando que para determinar los recursos a trasladar con motivo de la declaratoria judicial de nulidad o ineficacia de traslado de régimen debe aplicarse lo dispuesto en el artículo 7° del Decreto 3995 de 2008<sup>24</sup>, sin embargo, dicha norma

<sup>23</sup> “**ARTÍCULO 28. ALCANCE DE LOS CONCEPTOS.** <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución.”

<sup>24</sup> **Decreto 3395 de 2008** ARTÍCULO 1o. AMBITO DE APLICACIÓN. <Artículo compilado en el artículo 2.2.2.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016. Debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 3.1.1 del mismo Decreto 1833 de 2016> Las disposiciones contenidas en el presente decreto se aplican a

fue expedida para efectos de traslado en asuntos referentes a multifiliación, situación que no corresponde a la aquí ventilada y adicionalmente, tal concepto no obliga, pues se encuentra decantado por el órgano de cierre judicial en materia laboral y de seguridad social que los gastos administración y prima de seguro previsional deben retornar a Colpensiones como consecuencia de la ineficacia declarada.

No es pertinente en este caso acudir a la Sentencia C-1024 de 2004, como aspira Colpensiones en su recurso de apelación por Colpensiones y en sus alegatos de conclusión, porque lo señalado en dicho precedente constitucional contiene un problema jurídico diferente al planteado en esta instancia, sobre el cual son copiosas las providencias emanadas del órgano de cierre en la materia, donde se establecen los conceptos que deben devolverse como consecuencia de la declaratoria de ineficacia de traslado.

Ahora, atendiendo al grado jurisdiccional de consulta, y al principio de sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, previsto en el Acto Legislativo 01 de 2005, para que COLPENSIONES cuente con los recursos necesarios para asumir el pago de la prestación económica a que pueda tener derecho el hoy demandante se **MODIFICARÁ** la orden impartida a Protección S.A. desde la primera instancia, en el sentido de que ésta AFP del RAIS, dentro de los **30 días siguientes a la ejecutoria** de la presente providencia, debe trasladar a COLPENSIONES **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todo el tiempo en que la señora Rosa Elvira Sepúlveda Díaz figuró como afiliada al RAIS.

**Se modificará y adicionará** la sentencia en el sentido de ordenar que, con cargo a sus propios recursos, Protección S.A. debe trasladar a Colpensiones los valores descontados al demandante por concepto de aportes para la Garantía de Pensión Mínima, sumas adicionales de las aseguradoras y comisiones de administración, pues sus promotores incumplieron el deber de información que condujo a su respectiva afiliación y permanencia en el RAIS. Esto, sin que se supedite a la condición contemplada en la sentencia que se conoce en apelación y consulta, por ser una consecuencia derivada de la declaratoria de ineficacia.

Se precisa, que PROTECCIÓN S.A. también devolverá los conceptos mencionados descontados desde el 1 de octubre de 2002 al 30 de diciembre de 2012<sup>25</sup>, cuando ING PENSIONES Y CESANTÍAS SANTANDER S.A. era la administradora, en razón a la absorción de tal AFP por Protección S.A.

---

los afiliados al Sistema General de Pensiones que al 31 de diciembre de 2007, se encuentren incursos en situación de múltiple vinculación entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el de Ahorro Individual con Solidaridad y señala algunas normas de traslados de afiliados, recursos e información.

A las personas que, después de un año de entrada en vigencia la Ley 797 de 2003, se trasladaron al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) faltándoles 10 años o menos para tener la edad exigida para tener derecho a la pensión en este régimen, se les aplicará lo que establecen los artículos 7o, 8o y 12 del presente decreto

<sup>25</sup> Fecha de inicio de efectividad en ING Santander y hasta su fin, antes de iniciar su vigencia en Protección S.A. el 31 de diciembre de 2012. FI. 113

Pero, si la suma de todos los conceptos a trasladar resultare inferior al valor total del aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado, en caso de que el demandante hubiera permanecido en el régimen de prima media, **la AFP demandada** deberá asumir el pago de la diferencia que hubiere,

El cumplimiento de tales órdenes será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PROTECCIÓN S.A., sin trasladar consecuencias negativas al actor.

Se ordenará a Colpensiones recibir el valor de los aludidos conceptos e incorporarlos como aportes pensionales en la respectiva historia laboral de la señora Rosa Elvira Sepúlveda Díaz.

En este sentido se **modificará y adicionará** la sentencia que se revisa en apelación y grado jurisdiccional de consulta.

Resuelto el primer problema jurídico, se aborda el derecho pensional pretendido.

### **c) Procedencia del reconocimiento de pensión de vejez**

#### **Norma aplicable**

Para determinar si la hoy demandante consolidó o no el derecho pensional deprecado, se consideran los siguientes elementos fácticos y jurídicos: la actora nació el 25 de febrero de 1960<sup>26</sup>, por lo que al 30 de junio de 1995 contaba con 35 años de edad, fecha para la cual se encontraba afiliada a la ESE Hospital Mental de Antioquia -ente del sector público departamental-, en el cargo de auxiliar administrativo, único empleador de la demandante, por lo que en principio era beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por edad.

Para el 29 de julio de 2005, en que empezó a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, tenía 1.088 semanas de prestación de servicio, con o sin cotización al ISS, asistiéndole derecho a beneficiarse del régimen de transición hasta el año 2014, **no obstante, para tal fecha solo contaba con 54 años de edad, por tanto, no conservó el régimen de transición que inicialmente le asistía**, y en consecuencia se colige que su prestación de vejez se rige por el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, que le exige acreditar 57 años de edad y un mínimo de mil trescientas (1.300) semanas de cotización.

Acorde a historia laboral más actualizada que se allegó al plenario, se tiene que la actora cuenta en toda la vida laboral, con 1.748 semanas (contando tiempos con y sin cotización) hasta el 30 de abril de 2018, toda vez que no reposan en el expediente las sufragadas con posterioridad.

---

<sup>26</sup> Fl. 26

## Causación y disfrute de la prestación

La prestación se causó el 20 de febrero de 2017, cuando la actora alcanzó los 57 años edad y para la cual contaba con más de 1300 semanas cotizadas.

**En cuanto al disfrute de la pensión por vejez**, es cierto que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene definido que las pensiones que administra para su pago el Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, trátese de un trabajador particular o de trabajador oficial sometido al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, no se sufragan con dineros provenientes del Erario Público, porque aparte de que esta entidad no es propietaria del fondo económico del cual se pagan las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes; las cotizaciones que recibe de una entidad oficial, si bien provienen del Tesoro, constituyen un patrimonio de afectación parafiscal porque están destinadas exclusivamente a engrosar el fondo común para el pago de dichas prestaciones. De ahí que los dineros que en un comienzo fueron del Erario Público dejan de serlo al quedar trasladados a la entidad de seguridad social, y entran a engrosar una reserva parafiscal que por ficción legal y constitucional deja de ser propiedad de la entidad, a más de que una parte de esos aportes o cotizaciones proviene del patrimonio del trabajador.

En este contexto, una armonización de las disposiciones legales que exigían el retiro del servicio para disfrutar de la prestación por vejez, con la normativa pensional prevista en la Ley 100 de 1993, aun cuando en principio, permitiría concluir, en que no existe la prohibición contenida en los artículos 128 de nuestra Carta Política y 19 de la Ley 4ª de 1992 de recibir más de una asignación proveniente del Tesoro Público o de empresas o instituciones en las cuales tiene parte mayoritaria el Estado; y que bajo esas premisas no sería **aplicable la exigencia de retiro del servicio para poder hacer efectivo el disfrute de la pensión por vejez de los servidores públicos**. Sin embargo, ha interpretado esa alta Corporación, que el mandato contenido en **el artículo 19 de la Ley 344 de 1996 sobre racionalización del gasto público**, norma posterior a la Ley 100 de 1993, **impone al servidor público que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación, optar por dicho beneficio o continuar vinculado al servicio hasta que cumpla la edad de retiro forzoso; y dispone que la asignación pensional se empieza a pagar después de haberse producido la terminación de sus servicios en dichas instituciones**.

Por tanto, no existe viabilidad para la percepción simultánea de asignación salarial y de ingreso pensional por parte de los servidores públicos con derecho a pensión, porque éstos deben optar por cualquiera de los dos derechos, de manera excluyente. (CSJ, SCL Sentencias de 12 de septiembre de 2006, Radicado 28.257; 23 de abril de 2007, Radicado 27.435; 23 de marzo de 2011, Radicado 37.959; 19 de febrero de 2014, Radicado 46.644; SL10671 de 2016 y la SL4014 de 2018)

A juicio del Alto Tribunal, el retiro del servicio no es una exigencia de estructuración, consolidación o reconocimiento del derecho pensional, sino que tal condición necesaria de carácter suspensivo, lo es para su efectividad, goce o disfrute. (Sentencia SL 15084 de 29 de octubre de 2014, Radicado 45.631).

Ahora, los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, contentivo del Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte, prevén que la pensión por vejez se reconoce a solicitud de parte interesada una vez colmados los requisitos mínimos para acceder a la prestación, pero se requiere la desafiliación del régimen para poder disfrutar de la misma.

Sobre el tema se ha pronunciado reiteradamente la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y ha explicado que la causación y el disfrute de la pensión por vejez son dos figuras jurídicas distintas porque tienen identidad y efectos propios, pues la primera se da desde el momento mismo en que el afiliado reúne los requisitos mínimos de edad y densidad de semanas cotizadas; y la segunda, o sea, el disfrute de la pensión y su cuantía definitiva, están supeditados a la desafiliación del régimen. También ha dicho la Corporación que no es exacto afirmar que la desafiliación del sistema de pensiones pueda presentarse de manera tácita, porque ella supone un acto de declaración de voluntad del empleador o del afiliado que debe ser conocido por la entidad de seguridad social respectiva. Que una novedad de retiro del trabajador subordinado no es igual a la solicitud de desafiliación del sistema pensional, porque ella informa un hecho que supone un cambio en la situación laboral del afiliado, y no siempre su desafiliación. Y que, de manera excepcional, cuando en un proceso no exista la prueba de la desafiliación al sistema, ésta puede inferirse de hechos tales como la terminación del vínculo laboral del afiliado, la falta de pago de cotizaciones, y el cumplimiento de los requisitos de edad y semanas cotizadas, que no dejen duda de la intención del afiliado de cesar su vinculación al sistema en procura de la obtención del derecho pensional. (Sentencias de 21 de febrero de 2005, Radicado 24.370; 7 de septiembre de 2006, Radicado 27.140; y 1 de febrero de 2011, Radicado 38.776)

Así, la desafiliación al sistema o el retiro del servicio es una condición sine qua non para el disfrute de la pensión de vejez.

Del certificado obrante en fls. 68 del expediente, expedido por la Técnica Administrativa de la ESE Hospital Mental de Antioquia, se desprende que al 7 de noviembre de 2017 la actora se encontraba activa en su cargo de Auxiliar Administrativo en la entidad; de la historia laboral allegada por Protección S.A., se observan cotizaciones efectuadas por su empleador hasta el 30 de abril de 2018 y acorde a lo manifestado por la señor Rosa Elvira en su interrogatorio de parte al A Quo el 25 de junio de 2020, aceptó estar efectuando para dicho momento cotizaciones al sistema de seguridad social. Por ende, no hay lugar a ordenar aún el disfrute de la prestación al no existir certeza del retiro de servicio de la demandante.

### **Parámetros de liquidación**

Colpensiones debe tener en cuenta para liquidar la prestación, el total de semanas cotizadas por la demandante para efecto de que la tasa de remplazo o monto aplicado a su IBL, sea el que le resulte más favorable, con base a 13 mesadas anuales y sin perjuicio de los aumentos de ley.

Al respecto, el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003, determina el monto de las pensiones de vejez, señalando en su último inciso que:

*“A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima”.*

En este aspecto, habrá de **revocarse** la sentencia de primera instancia.

**d) Procedencia de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.**

Esta pretensión no será acogida al haberse definido sólo en este proceso lo relativo a la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual, no siendo atribuible a Colpensiones una tardanza en el reconocimiento y pago de la pensión de vejez de la demandante y por consiguiente, tampoco se generan intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, para que la prestación no se deprecie por efecto de la inflación que constituye un hecho notorio en la economía colombiana, se dispondrá su pago indexado.

### **III. EXCEPCIONES**

En grado jurisdiccional de consulta se estudian, además, las excepciones formuladas por la pasiva, las cuales quedan implícitamente resueltas, por haberse causado lo pretendido en la demanda.

En especial, no operó la prescripción pues la ineficacia no está sometida a dicha figura, por conllevar la inexistencia del acto jurídico sobre el cual recae y el reconocimiento pensional se presenta como una de las pretensiones consecuenciales del retorno al RPM administrado por Colpensiones, que acoge la postura de la H. Corte Suprema de Justicia, respecto a que las acciones judiciales tendientes a comprobar la forma en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles, como es el caso de la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales.

Finalmente, para resolver lo alegado por Protección S.A. en esta sede en cuanto a la aplicación del fenómeno extintivo sobre el 3% destinado a cuotas de administración y seguro previsional, debe indicarse que sobre este concepto, la prescripción no tiene vocación de prosperidad, pues tal y como la acción judicial tendiente a declarar la ineficacia del traslado de régimen es imprescriptible para quien todavía no se encontraba gozando de pensión de vejez, igual suerte corren los derechos que surgen como consecuencia de tal declaratoria, como aquel destinado a obtener el derecho pensional o los conceptos que se ordena devolver al RPM.



#### IV. COSTAS

No se impondrán costas en esta sede por haber prosperado parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones.

#### V. DECISION DEL TRIBUNAL

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### RESUELVE

**PRIMERO: MODIFICAR y ADICIONAR** las órdenes impartidas en el numeral SEGUNDO de la sentencia proferida el 25 de junio de 2020 por el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral de doble instancia promovido por la señora ROSA ELVIRA SEPÚLVEDA DÍAZ contra COLPENSIONES y PROTECCION S.A en el sentido en que esta última, deberá:

**Trasladar** con destino a COLPENSIONES, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, **la totalidad** de las sumas que se encuentran depositadas en la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros generados durante todos los años en que la demandante ha figurado como afiliada en el RAIS.

Con cargo a sus propios recursos PROTECCIÓN S.A. trasladará los valores descontados a la actora, en ese lapso, por concepto de aportes para la garantía de pensión mínima, comisiones de administración y primas de seguros.

PROTECCIÓN S.A. responderá adicionalmente por los referidos conceptos descontados cuando las cotizaciones de la demandante fueron administradas por ING PENSIONES Y CESANTÍAS SANTANDER S.A.

Pero, si la sumatoria de la totalidad de los valores que se ordena trasladar resultare inferior al valor total del aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubieran generado, en caso de que la demandante hubiera permanecido en el régimen de prima media, PROTECCIÓN S.A. deberá asumir el pago de la diferencia que hubiere, sin trasladarle consecuencias negativas a la demandante.

El cumplimiento de lo ordenado será verificado por COLPENSIONES, de manera coordinada con PROTECCIÓN S.A.

Se ordena a COLPENSIONES recibir de PROTECCIÓN S.A. los valores correspondientes a los conceptos aludidos e incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral de la demandante.

**SEGUNDO: REVOCAR** el numeral TERCERO de la de la sentencia proferida desde la primera instancia, para en su lugar, indicar que a la señora Rosa Elvira Sepúlveda Díaz le asiste derecho al reconocimiento de la pensión de vejez por parte de COLPENSIONES, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 33 de la ley 100 de 1993 modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003; la entidad deberá liquidar y pagar la prestación, una vez la demandante acredite ante ella el retiro del servicio, teniendo en cuenta la totalidad de semanas cotizadas por la demandante para efecto de que la tasa de remplazo o monto aplicado a su IBL, sea el que le resulte más favorable, con base a 13 mesadas anuales y sin perjuicio de los aumentos de ley.

**TERCERO: CONFIRMAR** en lo demás la referida sentencia, por lo expuesto en la parte motiva.

**CUARTO:** Sin costas en esta sede.

Se ordena notificar por estados y enviar copia de esta decisión al correo electrónico suministrado por los apoderados de las partes.

Devuélvase el expediente al despacho de origen.

Los Magistrados,



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA



ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN

Certifico que la anterior sentencia fue notificada por ESTADOS N° 45 fijados hoy 15 de marzo de 2021 a las 8:00AM

\_\_\_\_\_  
El secretario